



VISTOS para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por GRACIELA SUÁREZ NUÑO, en contra de LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, TODAS DEL ESTADO, ASI COMO LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA.

1. Mediante escrito presentado en esta Primera Sala Unitaria el veintiseiete de octubre de dos mil veintitrés, Graciela Suárez Nuño, interpuso por su propio derecho, demanda en la vía contenciosa administrativa, en contra de las autoridades que se citan en el párrafo que antecede, teniéndose como actos impugnados: a) La cédula de infracción con número de folio 203988893, atribuida a la Secretaría de Transporte del Estado; b) La cédula de infracción con número de folio 396027521, atribuida a la Secretaría de Seguridad del Estado; c) La cédula de infracción con número de folio 20183937026, atribuida a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara; d) Las cédulas de infracción con números de folio 00042864, 70402, 73811, 117882 y 120128, atribuidas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Tonalá; e) Los gastos de ejecución con número de folio M617004276502, imputados a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado; f) La determinación del derecho por concepto de refrendo anual de placas vehiculares correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés; g) Las actualizaciones y recargos generados por el derecho de refrendo anual respecto de las anualidades de dos mil diecisiete al dos mil veintitrés; h) La multa por refrendo anual extemporáneo del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete con número de crédito 17004221538, correspondiente al documento denominado, imposición de multa y requerimiento del pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma con número de folio M417004174757, expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado; todos los actos respecto del vehículo con placas de circulación **JME3737** del Estado de Jalisco; demanda que se admitió por auto de cinco de enero de dos mil veinticuatro.

2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza, y se ordenó emplazar a las enjuiciadas corriéndoles traslado con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran contestación, apercibidas de las consecuencias legales de no hacerlo, además, se le requirió a las autoridades demandadas para que al momento de dar contestación a la demanda exhibieran copias certificadas de los actos que le fueron atribuidos, bajo el apercibimiento legal en caso de no hacerlo así.

3. Por proveído de doce de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a las enjuiciadas dando contestación a la demanda, por lo que se admitieron sus pruebas teniéndose por desahogadas dada su propia naturaleza, así mismo, en virtud de que las enjuiciadas no cumplieron con el requerimiento que les fue efectuado, se les tuvieron por ciertos los hechos que la parte actora les imputó, por otro lado, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, exhibió copia certificada de los requerimientos aludidos por lo que se otorgó el término de diez días a la parte actora para que ampliara la demanda, apercibida en caso de no hacerlo.

4. Mediante acuerdo de fecha quince de abril de dos mil veinticuatro, se hizo constar que la parte actora no formuló ampliación a la demanda, por lo que se le tuvo por precluido el derecho.

5. Con fecha de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, se advirtió que no existían pruebas pendientes por desahogar y se concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, por lo que se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica de este Tribunal.



III. El interés jurídico del accionante, quedó colmado con el adeudo vehicular señalado con antelación, concatenado con la tarjeta de circulación, que en copia simple obra agregada a foja 28 del presente sumario, en los cuales se desprende de manera coincidente el número de placas vehiculares, y se señala en este última al demandante como contribuyente y sujeto obligado con relación a dicho automotor, lo que implica que es a quien se encuentra inscrito en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte en los términos del ordinal, 19 fracción II del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte establece, que establece que deberán inscribirse en tal registro los vehículos domiciliados en el Estado.

Cobra aplicación a lo expuesto, por las razones que sustenta, la tesis (III Región) 4o.47 A (10a.)¹, sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, que establece:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES PARA ACREDITARLO CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE AQUÉLLA Y NO SE TRATE DE UNA CONDUCTA PROPIA E INHERENTE ÚNICAMENTE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La cédula de notificación de una infracción en materia de movilidad y transporte y la tarjeta de circulación son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo en el que se demanda la nulidad de aquélla, sin que resulte indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, las infracciones a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente. No siendo aplicable, ni analógicamente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE.", en virtud de que trata un tema distinto; la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que se reclame el embargo trabado sobre un vehículo automotriz, en el que se establece que, por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que éste es su titular.

Así como la tesis jurisprudencial con número de registro 4/10ORD/SS/JA, tomo I 2019, de la Segunda Época, emitida por la Sala Superior del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, publicada en el Diario Oficial del Estado el 17 de agosto de 2019, que menciona lo siguiente:

JUICIO ADMINISTRATIVO. LA COPIA SIMPLE DEL ACTO DE AUTORIDAD ACREDITA PRESUNTIVAMENTE EL INTERÉS JURÍDICO DE LA PARTE ACTORA PARA INTERPONERLO. Si bien es cierto, que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de rubro INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las copias simples carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, lo cierto es que éstas generan la presunción de existencia de los documentos que reproducen; en tal tesitura, si de

¹ Página 1167, Libro 8, Julio de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 2006923, en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,



IV. Toda vez que al contestar la demanda, el Director de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara hizo valer una causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, por ser cuestión de previo pronunciamiento y de orden público en términos de lo dispuesto por el arábigo 30 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se procede en primer término a su estudio.

Esta Sala Unitaria considera que no se actualiza la causal de improcedencia reseñada, en virtud de que la parte actora no exhibió ningún recibo de pago, sino que acreditó su interés jurídico mediante la copia simple de la tarjeta de circulación, documento con el cual queda debidamente acreditado el interés, en virtud de que de dicho documento se desprende, el número de serie, número de placas y se señala a la demandante como dueña del vehículo de la presente controversia, lo anterior, de conformidad al artículo 117 numeral 1 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

V. Al no existir otras cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados por el demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

Es aplicable la jurisprudencia número PC.III.A. J/9 A (11a.)², sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que señala:

"JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO, LOS TRIBUNALES LOCALES ESTÁN OBLIGADOS A ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLEZCA DE REQUISITOS FORMALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias sobre la interpretación del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esto es, si el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad tiene o no la obligación de analizar de manera preferente los conceptos de anulación vinculados con el fondo del asunto, cuando de manera prioritaria se hubiese declarado fundado un motivo de disenso de forma (indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto). Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que en atención a los principios de mayor beneficio y de justicia completa, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco debe y tiene la obligación de decidir sobre los conceptos de anulación de fondo, con independencia de que el acto impugnado carezca de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Justificación: De la interpretación armónica y funcional de los artículos 1, primer párrafo, y 72 a 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se obtienen las siguientes premisas: El Tribunal de Justicia Administrativa estatal debe resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares; se fijan los requisitos que debe contener la sentencia (fijación clara de la litis, fundamentos jurídicos, puntos resolutivos y los términos del cumplimiento); no obstante, los formalismos judiciales constituyen un obstáculo para la resolución de los asuntos; de igual manera, las causas de nulidad comprenden tanto aspectos de fondo como de forma. Luego, derivado del análisis del anterior segmento

² Publicada con el registro digital número 2024109, Instancia: Plenos de Circuito, undécima época, Semanario Judicial de la Federación.



VI. En ese sentido este Juzgador, analiza el planteamiento del accionante, consistente en la negativa lisa y llana de conocer el contenido de las cédulas de infracción y gastos de ejecución controvertidos, ya que dice conoció su existencia el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, al consultar el adeudo vehicular de su automóvil a través de la página de internet oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, con que cuenta para tal fin.

"Artículo 48 Bis.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho"

Entonces, al ser la Secretaría de Seguridad del Estado, la Secretaría de Transporte del Estado, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Tonalá, a quien la parte actora imputó los citados actos, debieron acreditar en este juicio su emisión conforme a los requisitos de legalidad contenidos en el numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como su constancia de notificación y en ese tópico permitir a la parte actora que ampliara su demanda al respecto. Pero no lo hicieron así, de ahí que no colmaron con su carga probatoria, al no demostrar si el mismo cumplía con los requisitos de validez. A mayor abundamiento, se considera importante resaltar que los actos administrativos, por regla general, se presumen legales, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 48 Bis de la Ley de Justicia Administrativa, y 14 y 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, pero lo anterior tiene una excepción, estatuida en los mismos ordinales: cuando el gobernado **niega lisa y llanamente** conocer los actos, sin que la negativa implique la afirmación de otro hecho las autoridades son las que tienen la carga de la prueba, como ocurrió en la especie, caso en el que, como no puede demostrarse un hecho o acontecimiento negativo, la obligación de demostrar si los actos son legales se revierte hacia las autoridades, las cuales deben exponerlo, lo que en este caso omitieron las enjuiciadas, además de que no allegaron al presente juicio los actos controvertidos como se aprecia de constancias, de ahí que no desvirtuaron la negativa formulada por la parte actora al respecto.

Así, la omisión procesal referida, provoca que el promovente quede en estado de indefensión al no poder conocer los pormenores y circunstancias contenidas en el acto controvertido, ya que no puede verificar si se sitúa dentro de los supuestos legales de infracción que señaló la autoridad emisora en ellos; además de que resulta evidente que el accionante no puede ejercer su derecho de audiencia y defensa en contra de las actuaciones que le fueron imputadas, toda vez que nunca le fueron dada a conocer.

En consecuencia, debe considerarse que las autoridades enjuiciadas en el caso que nos ocupa, no cumplieron con la obligación procesal de que se trata, al no desvirtuar la negativa del actor, relativa a que no conocía los referidos actos, por consiguiente se debe declarar la nulidad de las mismas, al no poderse verificar si los documentos impugnados cumplían o no con lo dispuesto en los ordinales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; considerándose que en la especie se actualiza la causal de anulación prevista por los preceptos 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana de los actos controvertidos.**



"JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN."

Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.”

Así mismo, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 117/2011³, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/2011 que es del tenor siguiente:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Conforme a la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el momento de la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior por el Magistrado instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los principios de economía e igualdad procesales, que serían incumplidos con una conclusión distinta."

Igualmente cobra aplicación lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011 publicada en el Semanario Judicial de la

³ Visible en la página 317 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil once, consultada por su voz en el IUS 2010



"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

La Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, argumentó al respecto, que es inoperante dicho concepto de impugnación ya que la parte actora no demostró haber solicitado previamente la prescripción a la citada dependencia, por lo que no existe acto administrativo alguno susceptible de ser impugnado.

Como se observa la parte actora hace valer la prescripción de la obligación de pago del derecho de refrendo anual de placas vehiculares y holograma por el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, sin embargo, en el caso específico es facultad de este juzgador precisar la figura extintiva que resulte aplicable al caso, cuya dilucidación deriva de los hechos y constancias que conforman la materia de estudio de este sumario, lo que encuentra sustento en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 565, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, de rubro y texto siguiente:

Precisado lo anterior, debe considerarse lo establecido en el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, aplicable al caso concreto dice lo siguiente:



Aclarado lo anterior, este Juzgador concluye que el crédito derivado del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma por el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete pudo haber sido exigido a partir del uno de abril de dos diecisiete.

⁴ Página 159, Tomo XI, febrero del año dos mil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 192358 en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A6632000000000000000000013BBB
2025-06-20 13:10:42



VIII. Finalmente, este juzgador analiza **la determinación de derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma para los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés**, la parte actora, afirma que la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, violenta los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, en contravención a lo previsto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que se contemplan tarifas diferentes, para el pago del derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma, atendiendo el tipo de vehículo materia del refrendo, sin que ello influya de manera alguna al tipo y costo del servicio prestado por el Estado, por tanto solicita la inaplicación del supuesto normativo materia de impugnación.

Por su parte, la autoridad demandada al presentarse a producir contestación, refiere que se debe desestimar el concepto de impugnación que se contesta, al considerarlo improcedente por infundado, en razón que la jurisdicción de este Tribunal, en término de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de mera legalidad, sin que se encuentre autorizado ni obligado a conocer violaciones directas a las garantías o derechos humanos consagrados en el Carta Magna, en el entendido que no se cuenta con la facultad suficiente para resolver cuestionamientos propios del sistema de control de constitucionalidad de normas secundarias, propias del Poder Judicial de la Federación en términos de lo dispuesto en los artículos 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así también, señala que aun cuando resulta cierto que la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco anteriores al ejercicio fiscal dos mil veinte, prevé cuotas distintas para el pago de derechos por concepto de refrendo de tarjeta de circulación y holograma, es claro que dicha distinción no transgrede los principios de equidad y proporcionalidad como lo aduce el actor, ya que la prestación del servicio de la expedición de refrendo de tarjeta de circulación y holograma para un automóvil, motocicleta o de placas de denostación es completamente diverso, ya que le implica al Estado un despliegue técnico distinto en cada hipótesis.

En principio, por lo que ve a la anualidad de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, es sustancialmente fundado el agravio en referencia, toda vez que si bien es cierto que este Tribunal no puede pronunciarse directamente de la constitucionalidad de preceptos legales sobre los que no exista previo análisis por parte de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la declaratoria respectiva, sí tiene facultades para ejercer el control difuso de las mismas y dejar de aplicar los preceptos que transgreden la norma suprema, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de hacer prevalecer los derechos humanos mediante el ejercicio interpretativo de los preceptos en disputa.

Circunscriba la litis a resolver, en primer lugar, es propio resolver, si es procedente o no, realizar el estudio propuesto por la parte actora, respecto de la convencionalidad de la norma tributaria que considera contraviene los principios rectores en dicha materia, consagrados en el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, que, a consideración de la demandada, es facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, se estima no le asiste la razón a la autoridad demandada, si en cuenta se tiene que, a virtud de la reforma al artículo 1 Constitucional, de diez de Junio de dos mil once, se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad, pues el mismo ya no es limitativo de los órganos del Poder Judicial de la



Federación, a través de los medios legalmente establecidos, sino que ahora, todas las autoridades del País, esencialmente las de carácter jurisdiccional y en el ámbito de su competencia, están facultadas y obligadas, a observar y preservar los derechos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, en el entendido que si bien se tiene acotada la posibilidad de hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, sí se encuentran en posibilidad de inaplicarlas, de estimarse que no son conforme a la Constitución o a los Tratados Internacionales y que transgreden derechos fundamentales de los gobernados.

De ahí entonces, que a la luz del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal sí se encuentra facultado para realizar el estudio propuesto por el accionante, en cuanto a la conformidad o no de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en contraste con lo estipulado en el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, en vía del control difuso a fin de determinar su aplicabilidad o su desaplicación, sin llegar a emitir pronunciamiento respecto a una inconstitucional general, lo anterior atendiendo además lo establecido en la Tesis LXVII/2011(9a)⁵, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el siguiente rubro y texto:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”

De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.)⁶, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir

⁵ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, diciembre de 2011, Tomo I, página 535.

⁶ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, diciembre de 2012, Tomo I, página 420.



Por tanto, el principio de proporcionalidad se encuentra vinculado con la capacidad económica de los contribuyentes, la que debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso se vea reflejado cuantitativamente en relación directa a los ingresos obtenidos, la dimensión del patrimonio o bien, el consumo realizado; acorde a lo anterior, el legislador se encuentra obligado a graduar los tributos de manera que la contribución de los gobernados al gasto público se realice en función del mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible, a saber, que sea la base gravable, la tarifa o tasa la que permita medir esa capacidad económica condicionando toda su estructura y contenido del gravamen previsto en la norma. Se invoca al efecto, para mayor soporte la Jurisprudencia P./J. 42/97 (9a)⁷, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:

Por su parte, el principio de equidad tributaria persigue evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación, la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. La equidad tributaria representa que los contribuyentes de un mismo tributo, guarden una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando, por

⁷ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. junio de 1997. página 36.



"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

Ahora, se debe tener en cuenta, que la contribución que se controvierte, en cuanto a su conformidad a los principios rectores consagrados en el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, corresponde a un "derecho", cuya definición la encontramos en el artículo 7 fracción II del Código Fiscal del Estado de Jalisco, que al efecto dice:

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

⁹ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, junio de 1997, Tomo V.



De la anterior inscripción, se sigue que por derecho se entiende, la contraprestación que legalmente percibe el Estado, con motivo de un servicio prestado a los particulares, en función de su ejercicio público.

Así las cosas, se tiene que los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias a virtud de derechos por servicios, se rigen por su propio sistema, pues para la determinación de la cuotas correspondientes, se debe insoslayablemente tomar en cuenta el costo real, que conlleve al Estado, la prestación del servicio solicitado y que se fijen bajo respetando desde luego, de manera igualitaria para los que se encuentren en la misma situación jurídica, lo anterior como así lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 2/98 (9a)¹⁰, bajo el siguiente rubro y texto:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUITAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y **que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.**

En las relatadas circunstancias, se tiene que de la norma cuestionada, y **únicamente en cuanto a la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve** se advierte claramente que se establecen diversas tarifas a pagar por concepto de derecho por refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, partiendo del tipo de vehículo cuyas placas y holograma son materia del refrendo, como lo es, automóviles, camiones, tractores, remolques, motocicletas, placas de demostración o bien vehículos híbridos, no obstante que, y contrario a lo que señala la autoridad demandada, éste es un elemento ajeno a la actividad técnica que realiza el Estado para la expedición del acto, en razón de que el tipo de automotor, no influye en los recursos materiales y humanos que despliega el Estado para la expedición del holograma y en su caso de la tarjeta de circulación correspondiente, por lo que, el cobro efectuado por éste concepto, bajo estos parámetros son inequitativos y desproporcionales, ya que toma en cuenta elementos distintos al tipo de servicio que se presta, provocando así que ante la solicitud del mismo servicio – refrendo anual de placas y holograma-, los solicitantes que se encuentran en la misma situación legal eroguen cantidades diferentes, lo que genera inequidad a quienes se encuentran en el mismo supuesto jurídico, al no atender al verdadero costo del servicio, cuyas cuotas deben ser fijas e iguales para quienes reciban un determinado servicio.

Lo anterior es así, si tomamos en consideración que las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos, como se precisó con antelación, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad, partiendo del concepto de derechos, que tiene que ver con el pago en razón de las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servicios que presten el Estado en sus funciones de derecho público, acorde a lo previsto en el artículo 7 fracción II del Código Fiscal Estatal, de tal manera que para la determinación de las cuotas invariablemente deben corresponder al real que para el Estado le irroque la ejecución del servicio, así como y que sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

¹⁰ *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VII, de enero de 1998.

BERNARDO VILLALOBOS FLORES
706A6620636A66320000000000000013991
2025-06-18 17:35:05

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A6632000000000000000000013BBE
2025-06-20 13:10:42



"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No

Ahora bien, como ya se determinó, cierto es que le asiste la razón a la parte actora únicamente en el sentido de que el artículo que le fue aplicado **de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve** transgrede los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, respecto del pago de derechos por refrendo y expedición de holograma, sin embargo ello no significa que quede relevado de su obligación constitucional contenida en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que es necesario que todos los gobernados contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva y tratándose de la contraprestación que debe cubrir un ciudadano por un servicio que le preste el Estado, se traduce que todos los individuos que se sitúen en una misma hipótesis normativa paguen la misma tarifa por el servicio prestado, en el caso concreto por refrendo y expedición de holograma, **por tanto deberá la autoridad demandada aplicar la tarifa menor** que se contempla la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente.

Calzada Lázaro Cárdenas Número 2305 zona 1, interior L-11 y L-101, Colonia las Torres, Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org



A lo anterior encuentra aplicación por analogía, la tesis jurisprudencial PC.III.A. J/42 A (10a).¹² del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice:

"DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma. En congruencia con ese criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, con motivo de su aplicación en una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos fundados en tales preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una nueva resolución en la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos indicados."

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 20/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 11 de diciembre de 2017. Mayoría de seis votos de los Magistrados Juan José Rosales Sánchez, René Olvera Gamboa, Elías H. Banda Aguilar, Marcos García José, Óscar Naranjo Ahumada y Juan Manuel Rochín Guevara. Disidente: Filemón

¹² Publicada con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 2016854 del "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 575/2016, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 246/2015, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 555/2014 y 312/2016, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 384/2016 y 659/2016, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 646/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de mayo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013”.

IX. En consecuencia, al resultar ilegal la determinación del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma correspondiente a los ejercicios fiscales de dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, siguen su suerte los actos derivados del mismo, al ser frutos de actos viciados de origen, **se declara la nulidad de los recargos y actualizaciones**, generados por el citado derecho por el mismo periodo.

Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito¹³ que a la letra dice:

"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE." Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal."

X. Por otro lado, por lo que ve a la determinación del derecho de refrendo anual por el **ejercicio fiscal de dos mil veinte**, no le asiste la razón al demandante toda vez que como lo resolvió el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en la ejecutoria de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios 47/2023, el 23, fracciones III, inciso a) y III Bis, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, no vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria porque dicho precepto, la tasa diferenciada establecida en dicho precepto, en la cuota que se cobra para la prestación del servicio de refrendo anual vehicular a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, por un lado, y a los de motocicletas, por el otro, no supone una vulneración a tales principios debido a que no produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sino que atiende a una justificación objetiva y razonable, en razón de que para la prestación del servicio a los usuarios del primer grupo, el Estado realiza una actividad que genera un costo mayor, consistente en la expedición de la calcomanía de identificación vehicular acorde a los estándares técnicos y de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, los que como se vio son amplios y exigen una fabricación confiable que cumpla con los elementos de seguridad precisados en dicha norma.

En efecto, dicho Pleno resolvió en la ejecutoria referida, con relación al citado derecho lo siguiente:

Ahora bien, como el problema jurídico a dilucidar versa sobre si el artículo 23, fracciones III, inciso a) y III Bis, de las Leyes de Ingresos para el Estado de Jalisco, correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias

¹³ Publicada en la página 280 del tomo 121-126 sexta parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, consultada al través del registro 252103 del "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

BERNARDO VILLALOBOS FLORES
706A6620636A66320000000000000013991
2025-06-18 17:35:05

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A663200000000000000000013BB
2025-06-20 13:10:42



"5.2 Especificaciones técnicas de las calcomanías de identificación vehicular.



"• *Serie de la calcomanía.*



También estableció que con el objeto de garantizar la actualización y control de los padrones vehiculares de las entidades federativas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es indispensable contar con información confiable que coadyuve a mejorar la vigilancia e identificación de las placas metálicas y calcomanías que se utilicen en vehículos involucrados en delitos como: robos, secuestros, narcotráfico y accidentes que provoquen pérdida de vidas humanas; de ahí que a fin de reforzar la confiabilidad de la fabricación de placas metálicas y calcomanías de

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A66320000000000000000000013BBB
2025-06-20 13:10:42



Conforme a lo anterior, este Pleno Regional considera que la norma sujeta a análisis constitucional respeta el principio de proporcionalidad tributaria, pues si bien para individualizar el costo del servicio de refrendo anual vehicular no existe la obligación impuesta por ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas que le genera al Estado la prestación de ese servicio en concreto, y toda vez que en términos de lo sostenido por el Alto Tribunal, es necesario que exista un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, se estima que en el caso se actualiza ese supuesto, debido a que la actividad administrativa que para el Estado de Jalisco representa fabricar las calcomanías de identificación vehicular, acorde a los estándares técnicos y de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que entrega a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, implica un costo mayor que el que representa para brindar el servicio a los usuarios de motocicletas a quienes no proporciona dicha calcomanía.

En efecto, dicho documento debe cumplir con las especificaciones técnicas y los elementos de seguridad establecidos, lo que de suyo implica un mayor esfuerzo en los recursos humanos y materiales del Estado; de ahí que el material en el que se expide, es un elemento objetivo contenido en el mismo texto legal que se relaciona con el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio.

Asimismo, como se vio, para respetar el principio de equidad tributaria, basta con que las leyes reguladoras de las contribuciones denominadas derechos, otorguen un tratamiento igualitario a todos los usuarios de los servicios correspondientes, lo que se traduce en que las cuotas o tarifas conforme a las cuales se cobran los derechos, deben ser iguales para quienes reciban servicios análogos o bien, en su caso, para quienes hagan un uso o aprovechamiento idéntico.

En el particular, la norma clasifica a los usuarios que solicitan el servicio en dos grupos: a) De automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, a quienes impone la tarifa de \$649.00 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.); y b) A los de motocicletas, a quienes cobra la tarifa de \$260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), lo que resulta así porque al primer grupo otorga calcomanía de identificación vehicular cuyas características deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016; y al segundo, sólo incluye la expedición de la tarjeta de circulación, pero no la calcomanía referida.

Entonces, la norma otorga un trato igual a todos los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, pues sin distinción alguna, pagarán las cuotas fijas de \$649.00 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.); por otra parte, es equitativo que la tarifa impuesta a los contribuyentes usuarios de motocicletas sea menor –\$260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)–, que la pagada por los primeros, atendiendo a que por el servicio prestado únicamente recibirán la tarjeta de circulación sin incluir calcomanía de identificación vehicular, lo que implica un costo menor para el Estado, porque sólo así se respeta la garantía de equidad tributaria, pues no debe perderse de vista que el legislador, para salvaguardarla, está facultado para establecer categorías de contribuyentes, a efecto de dar el mismo trato a quienes se ubiquen en la categoría relativa.

De ahí que la tasa diferenciada en la cuota que se cobra para la prestación del servicio de refrendo anual vehicular a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, por un lado, y a los de motocicletas, por el otro, no supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sino que atiende a una justificación objetiva y razonable, en razón de que para la prestación del servicio a los usuarios del primer grupo, el Estado realiza una actividad que genera un costo mayor, consistente en la expedición de la calcomanía de identificación vehicular acorde a los estándares



Entonces, la norma impugnada respeta el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debido a que la actividad administrativa del Estado implica un incremento en el costo para brindar el servicio a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, en comparación con los usuarios a quienes no proporciona dicha calcomanía; de ahí que también respeta el principio de equidad tributaria porque la tasa diferenciada en la cuota que se cobra para la prestación de ese servicio es equitativa, debido a que no produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sino que atiende a una justificación objetiva y razonable, conforme al despliegue técnico que realiza el Estado.

Por tanto, el artículo 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veinte, al establecer un costo diferenciado por el pago del refrendo anual de vehículos atendiendo a la entrega de la calcomanía de identificación vehicular, no viola los principios tributarios de equidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego, de tal ejecutoria derivó la jurisprudencia número PR.A.CS. J/28 A (11a.), sostenida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, publicada el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, de rubro y texto siguiente:

"DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL ARTÍCULO 23, FRACCIONES III, INCISO A), Y III BIS, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE ESTABLECE UNA TASA DIFERENCIADA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUITAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones contrarias al analizar si el artículo 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, que establece distintas cuotas para el pago de derechos de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular, para automóviles y motocicletas, viola o no los principios tributarios de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que el artículo 23, fracciones III, inciso a), y III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, no vulnera los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Justificación: El citado precepto establece que por los servicios de refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular, el derecho se causará de acuerdo con una tarifa diferenciada, en razón de que a los usuarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, impone una tarifa de \$649.00 (seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), y por el refrendo anual de motocicletas, la tarifa de \$260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debido a que la actividad administrativa que para el Estado de Jalisco representa fabricar las calcomanías de identificación vehicular acorde a los estándares técnicos y de calidad establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que entrega a los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques para el servicio particular y público, implica un costo mayor que el que representa para brindar el servicio a los usuarios de motocicletas a quienes no proporciona dicha calcomanía; por tanto, también respeta el principio de equidad tributaria, porque la tasa diferenciada en la cuota que se cobra para la prestación de ese servicio no produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sino que atiende a una

BERNARDO VILLALOBOS FLORES
706A6620636A66320000000000000000001399
2025-06-18 17:35:05

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A6632000000000000000000013BBB
2025-06-20 13:10:42



*PLENO REGIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN CENTRO-SUR,
CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS.*

Contradicción de criterios 47/2023. Entre los sustentados por el Primer, el Segundo, el Tercer, el Cuarto, el Quinto, el Sexto y el Séptimo Tribunales Colegiados, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 30 de agosto de 2023. Mayoría de dos votos de la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez y del Magistrado Arturo Iturbe Rivas (presidente). Disidente: Magistrada Silvia Cerón Fernández, quien formuló voto particular. Ponente: Magistrado Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: Rosalba Janeth Rodríguez Sanabria.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 247/2022, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 388/2022, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 422/2021, 317/2022, 404/2022, 491/2022 y 622/2022, el sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 354/2021 y 209/2022, y el diverso sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 516/2022.

Nota: Esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de criterios 47/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de noviembre de 2023 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 21 de noviembre de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021."

Por otra parte, por lo que ve a la determinación del derecho por concepto de refrendo anual de placas vehiculares correspondiente a los ejercicios fiscales de **dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés**, es infundado el concepto de impugnación reseñado por los siguientes motivos:

Para una mejor comprensión de la cuestión a dilucidar, es importante destacar la Ejecutoria de Contradicción de Tesis 1/2013 entre las posturas sustentadas por los Tribunales Tercero, Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de siete de octubre de dos mil trece¹⁴, que estableció conforme a la doctrina, a los derechos como las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

De tal concepto derivan las siguientes características de los derechos:

- a)** Los derechos son contribuciones; pues si bien al particular le corresponde provocar la prestación del servicio, el pago del precio es obligatorio.
- b)** Los derechos deben estar establecidos en una ley; lo anterior a fin de ser congruente con el principio de legalidad que para toda contribución exige el artículo 31, fracción IV, constitucional.
- c)** Los derechos deben pagarse por los siguientes conceptos:
 - 1.** Por servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público;
 - 2.** Por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.

¹⁴ Número de Registro 24749, Libro 2, enero de dos mil catorce, Tomo III, página 1975, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

BERNARDO VILLALOBOS FLORES
706A6620636A66320000000000000000013991
2025-06-18 17:35:05

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A6632000000000000000000013BBE
2025-06-20 13:10:42



"DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA

BERNARDO VILLALOBOS FLORES
706A620636A66320000000000000000001399E
2025-06-18 17:35:05

CINTHIA JAZMIN RUIZ LOPEZ
706A6620636A6632000000000000000000013BBB
2025-06-20 13:10:42

Calzada Lázaro Cárdenas Número 2305 zona 1, interior L-11 y L-101, Colonia las Torres, Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjajal.org



"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUITAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que **para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.**"

1. El monto de cuota debe guardar una correspondencia razonable con el "costo" que para el Estado tenga la realización del servicio, aunque sea de manera aproximada; y,

Ahora bien, el artículo 23, fracción III, inciso a) y fracción III Bis, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés, estatuye lo siguiente:

"Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:

- | | | |
|-----------|---|------------|
| a) | Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques
servicio particular y público: | \$688.00 |
| b) | Placas de demostración: | \$1,668.00 |

Calzada Lázaro Cárdenas Número 2305 zona 1, interior L-11 y L-101, Colonia las Torres, Guadalajara, Jal. / Tel: (33) 3648-1670 y 3648-1679 / e-mail: tadmvo@tjaial.org



"Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público:

- | | |
|---|------------|
| a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público: | \$711.00 |
| b) Placas de demostración: | \$1,725.00 |

Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés:

"Artículo 23. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Seguridad y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. *Por Refrendo Anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad QR, para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público.*

- c)** Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques
servicio particular y público: \$734.00
- d)** Placas de demostración: \$1,780.00
- La tarjeta de circulación de PVC a que hace referencia en esta fracción III, tendrá una vigencia máxima de cuatro ejercicios fiscales considerando el de su emisión, y será obligatoria su sustitución anticipada en la presentación de los avisos de cambio de propietario, cambio de domicilio, cambio de características del vehículo, y en nueva dotación de placas de circulación.

III Bis. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación en papel para motocicletas:
\$314.00

De los preceptos trasuntos se advierte que se prevé el cobro de derechos por el refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, indicándose en la fracción III inciso a) la cuota correspondiente, y en la fracción IIII Bis, se establece la tarifa respecto de motocicletas, siendo distintas en ambos casos.

Sin embargo, existe una diferencia substancial respecto del refrendo anual para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques servicio particular y público, con relación de las motocicletas, ya que respecto del primer tipo de automotores la tarjeta de circulación que se expide es de PVC con código de seguridad QR y por lo que ve a las motocicletas se otorga en papel.

Entonces, no obstante que se trata de la prestación de un mismo servicio, esto es, refrendo anual y tarjeta de circulación, el costo que para el estado implica otorgarlo en ambos casos es diverso, ya que como se indicó, en un supuesto se expide la tarjeta de circulación en PVC con código



Asimismo, en el mismo Artículo 23, fracción III, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, hace alusión a que la tarjeta de circulación de PVC a que hace referencia en esta fracción, tendrá una vigencia máxima de cuatro ejercicios fiscales considerando el de su emisión; sin embargo, en este caso en particular no ha sido enterado lo correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, por lo que no cuenta con la tarjeta de circulación de PVC con código de seguridad QR.

Lo anterior encuentra sustento en la contradicción de criterios 47/2023, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación número PR.A.CS. J/29 A, entre las posturas sustentadas por los Tribunales Primero, el Segundo, el Tercer, el Cuarto, el Quinto, el Sexto y el Séptimo, todos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada el día diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, que dice:

En consecuencia, **se declara la validez de las determinaciones del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma correspondientes a los ejercicios fiscales de dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés**, así como sus respectivos recargos y actualizaciones con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 72, 73, 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y resolver este juicio.

